



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

### SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO: 72428/2015

**AUTOS: “NISIM HERNAN MOISES Y NISIM ENRIQUE AARON S.H. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Buenos Aires,

### VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 93/100 contra la resolución n° 114/2015 ( DV TJSO-RI RRSO) que no hizo lugar a la impugnación administrativa y su ampliatoria presentada por el contribuyente contra las actas de inspección e infracción labradas bajo la O.I 1033102 respecto de tres trabajadores no registrados Sres Mónica Mamani, Franklin Eloy Marquez y Marco Antonio Noguera en virtud de lo dispuesto en el art. 15 punto 1 inc.b) de la ley 17250 y Resol.Gral N° 1566/04.

Que por otra parte, el incumplimiento del pago de la deuda derivó en la imposición de una multa dispuesta bajo resolución administrativa N° 147/15 ( DV TJSO) por la misma causa. Luego, impugnada dicha decisión y mediante resolución N° 1072/15 ( DI CRSS- DV-REVB se desestimó el recurso y se mantuvo la sanción impuesta remitiéndose los actuados al fuero en lo Penal Económico de conformidad con lo dispuesto en el art. 77 de la ley 11683.

Que a fs.155 el organismo ordenó la remisión de los presentes obrados a este Tribunal informando que el actor no cumplió con el requisito del depósito previo.

Que sin perjuicio de ello, surge de fs. 151 y 153 que el apelante dió cumplimiento con el depósito correspondiente a la deuda que se le imputa. (Conf. art. 15 de la ley 18820).

Que corresponde en este estado verificar los demás requisitos de admisibilidad de recurso intentado.

Que tal como la norma lo prevé, el recurso deberá sujetarse a la forma, modo y plazos fijados en el artículo 9° de la Ley N° 23.473 y sus modificatorias. Atento ello, y a tenor de la reforma introducida por la ley 26.063, deberá presentarse con firma de letrado y con expresión de agravios ante el mismo organismo administrativo que dictó la medida y dentro de los treinta (30) días de notificada si el recurrente se domicilia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los cuarenta y cinco (45) días si se domicilia en el interior del país.

Que conforme se constata en autos, el remedio intentado contiene firma de letrado, domicilio electrónico y fue presentado en término.

Que respecto de la cuestión de fondo, surge de las actuaciones que por sentencia del 25 de agosto de 2016 registrada bajo el N° 340/16 el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7 Secretaria 13 decidió revocar la Resolución 1072/15 que determinó una multa impuesta al actor, por considerar que con las pruebas existentes en la causa no se acreditó que las tres personas relevadas en su oportunidad Sres. Mamani, Marquez y Noguera fueran personal dependiente de la Sociedad de Hecho NISIM HERNAN MOISES Y NISIM ENRIQUE AARON. ( Ver fs. 169/171).

Que cabe poner de resalto que dicho decisorio fue confirmado en la Alzada por la Sala A de la Excma. Cámara en lo Penal Económico. ( Ver fs. 172).

Que resulta importante destacar en este contexto cuáles son los alcances y los efectos del instituto de la cosa juzgada.

Que compartimos los argumentos sostenidos por la Excma. CSJN en autos “RHE deducido por Néstor Farías Bouvier en la causa Farías Bouvier, Néstor c/ Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/ ordinario, sentencia del 11/2/2021, por lo que consideramos que el instituto de la “ cosa juzgada” configura uno de los pilares sobre los que



se asienta la seguridad jurídica y un valor de primer orden que no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones, pues ataca las bases mismas del sistema procesal y afecta la garantía del debido proceso.

Que en tal sentido cabe recordar que nuestra jurisprudencia, en forma reiterada, ha defendido la estabilidad de las decisiones judiciales, con el propósito de evitar que las controversias de las partes se renueven indefinidamente, lesionando, de esa suerte, tanto la seguridad jurídica, como el orden y la paz social.

Que refiriéndonos a este instituto y en virtud de lo que dispone el art. 347 del CPCCN, para que sea procedente aplicarlo es necesario realizar un exámen minucioso e integral de las dos contiendas y se debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad, o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en la otra causa.

Que consideramos que es ésta precisamente la situación que se da en el presente puesto que conforme surge del relato de los párrafos precedentes, existe identidad de sujetos, objeto y causa entre el presente y los pronunciamientos que tuvieron lugar en la justicia en lo Penal Económico.

Que a mayor abundamiento señalamos que compartimos la Doctrina que sostiene que el principio de “La verdad jurídica objetiva” es la esencia del proceso y puede definirse como: *“una actitud del Juez que lo impulsa al descubrimiento de la verdad, ya no entendida como un mero concepto jurídico sino por su fondo ético”* . Es decir que este principio funciona como un límite al formalismo riguroso de las normas para asegurar lo que Pedro J. Bertolino llama el *“servicio de justicia adecuado”*. Por ello, la decisión del juez se legitima por el valor de verdad que se pretende defender. (Conf.Bertolino, Pedro J., “La Verdad Jurídica Objetiva”, Segunda edición, Revisada, Ampliada y Actualizada, LexisNexis, Buenos Aires, 2007.).

Que este principio postula que los jueces no pueden renunciar a fundamentos fácticos, de los cuales surja claramente la solución del conflicto. En el caso de autos, del relato de los hechos surge la existencia de cosa juzgada, puesto que .....

Que por todo lo expuesto, compartimos y hacemos nuestros los términos y fundamentos esgrimidos por el Sr. Representante del MInisterio Público en su dictámen a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad, por lo que corresponde revocar la resolución atacada, hacer lugar al recurso planteado, declarar la cosa juzgada en las presentes actuaciones y ordenar la devolución del depósito ingresado en cumplimiento de los arts. 9 de la ley 23.473, 15 de la ley 18.820 y 39 bis del Decreto Ley 1285/58, con más el interés que resulte de aplicar la tasa pasiva para el uso de la justicia que publica el BCRA.

Que por ello, el Tribunal **RESUELVE** : 1) Declarar la cosa juzgada en las presentes actuaciones; 2) Hacer lugar al recurso de apelación deducido y revocar la resolución cuestionada; 3) Ordenar la devolución de las sumas depositada en cumplimiento del requisito de pago previo con más el interés que surja de aplicar la tasa pasiva del BCRA ; y 4) Sin costas en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 10/25 y, oportunamente, remítase.

